

Gobierno promete plan de auxilio para el agro

La danza de millones de dólares está en marcha. La 41.ª Feria Internacional de Santa Cruz, Expocruz 2016 abrió sus puertas anoche en medio de una expectativa por superar las cifras anteriores pese a la desaceleración económica.

En el evento multisectorial más importante de Bolivia y de Sudamérica, el vicepresidente Álvaro García Linera prometió ayudar al sector agropecuario con un paquete económico (línea crediticia de la CAF) exclusivamente orientado a los productores, con el objetivo de enfrentar la sequía y salvar la campaña de verano 2016-2017.

Así lo anunció la autoridad nacional a tiempo de inaugurar la muestra y en la que calificó al departamento como el “motor económico” del país. García Linera inauguró la feria en ausencia del presidente Evo Morales, que viajó a Venezuela a participar de una reunión de los países del bloque de los No Alineados.

El segundo hombre fuerte del país resaltó la pujanza económica de Santa Cruz y sus numerosos aportes al desarrollo nacional. De igual forma, mostrando datos del (Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), dejó en claro que la mayoría de los sectores económicos mostró un repunte al primer semestre de este año.

Citó por ejemplo que el sector financiero registró un crecimiento del 6% hasta junio; transporte y comunicaciones, un 6,2%; comercio, un 5%; construcción, un 10%; manufactura, 8,4% y minerales, 5,8%.

Admitió que se atravesaron problemas en hidrocarburos con una disminución de volúmenes e ingresos que han sido remontados con la puesta en marcha del megacampo Incahuasi. Refiriéndose a la tasa de crecimiento de la agricultura dijo que es el único sector que registra altibajos. En enero fue del 2,5%; febrero, 2,2%; marzo, 2,5%; abril, -1,3%; mayo, 1,6% y junio, un 4%. No obstante indicó que la tasa de crecimiento hasta fin de año se mantendrá a un ritmo moderado.

“Buena parte de la economía del país depende de la agricultura y la economía cruceña depende de la agricultura. Hemos tomado medidas importantes para mantener el dinamismo del sector agrícola”, indicó.

La autoridad agregó que el Gobierno no se quedó de brazos cruzados y trabajó, por ejemplo, en la ley de desmontes para garantizar la seguridad jurídica de la tierra.

Promovieron, según dijo García Linera, la distribución de tierras a mediados y pequeños, hicieron viables los créditos productivos que estaban estancados para el agro. Sin embargo, “estas medidas no han sido suficientes para la sequía”, explicó.

En Santa Cruz, tierras recortadas por el INRA valen desde \$us 1.000

Durante el proceso de saneamiento, la superficie de un predio productivo, en algunos casos, según el criterio técnico utilizado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), es mayor a la esperada por lo que debe recortarla y declararla tierra fiscal.

Aunque el propietario de los terrenos tiene el derecho a apelar y si es necesario llegar al Tribunal Agrario. Sin embargo, mientras eso sucede esos ‘pedazos’ de tierra son los más codiciados por los tomatierros que dicen contar con información de primera mano e ingresan a esos predios

¿El motivo? Esas tierras ya fueron trabajadas, tienen un historial positivo de producción agropecuaria comprobado que las hace tentadoras y a la vez vulnerables.

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) explicaron que no tienen datos sobre cuántas son las hectáreas producto de los recortes que se volvieron tierras fiscales, pero sí tienen la certeza de que estos retazos de tierras son el imán para que los tomatierros se entren en los predios argumentando que son terrenos fiscales y generen tensión entre los propietarios legales.

El valor de la tierra

Según los productores, para que un predio esté en condiciones de producir alimentos o para que el ganado se alimente se tiene que trabajar de uno a dos años.

Edilberto Osinaga, gerente de la CAO, explicó que los trabajos básicos que se hacen son el desmonte, la limpieza, hasta dos veces, y el alambrado del lugar. Si se trata de predio ganadero se siembra pasto.

“Estos trabajos requieren una fuerte inversión que oscila entre los \$us 800 y los \$us 1.000 por hectárea. La idea es dejar listo el terreno para empezar a producir o a alimentar al ganado”, dijo Osinaga.

En cuanto al precio de la hectárea, Osinaga indicó que esta varía según la ubicación y su vocación productiva.

“De forma general en el departamento la hectárea lista para producir está entre \$us 1.000 y \$us 5.000. Son costos que pueden variar según la zona de producción”, indicó Osinaga.

A su vez, Vicente Gutiérrez, presidente de la Asociación de Productores de Maíz, Sorgo y Frejol (Promasor), puntualizó que la hectárea de los terrenos listos para ser usados en la zona sur del departamento se cotiza entre \$us 1.000 y \$us 2.000.

Mientras que en el norte debido a la calidad de la tierra y a los buenos rendimientos, el precio de la hectárea está entre los \$us 2.500 y \$us 5.000.

Similar costo tienen los terrenos ubicados en el este del departamento.

“Se trata de tierras que en una sola hectárea el productor logra obtener una rentabilidad del 20%, por eso tienen un valor bien alto”, subrayó Gutiérrez.

Las más codiciadas

Tomás Juchani, productor de la zona este, desde hace mucho trata de retirar a más de 15 familias que están en una parte de su predio Guapurú, en Pailón (Santa Cruz), ellos argumentan que se trata de algunas hectáreas que el INRA recortó y las volvió tierras fiscales, por eso las están ocupando.

Juchani rechazó esa explicación y remarcó que el 100% de la superficie de ese predio es de su propiedad.

“Es fácil meterse en una propiedad lista para producir. No gastan nada todo está hecho”, se lamentó Juchani.

Al respecto, Julio Roda, presidente de la CAO, indicó que este tipo de líos de tierras se repite en el departamento, afectando a los productores que por algún motivo están en disputas legales para demostrar que la totalidad de sus predios es de su propiedad y que están cumpliendo con la función económica social.

Roda señaló que este tipo de situaciones se debe solucionar de forma rápida y el INRA con su informe técnico debe ser la principal llave para evitar este tipo de atropellos.

Al respecto, Reinaldo Díaz, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), en su momento señaló que las denuncias de productores, propietarios de predios legales, no son atendidas de forma urgente, por lo que la inseguridad jurídica es una de las preocupaciones del sector productivo.

Sobre el tema se envió un cuestionario al INRA nacional, pero desde el departamento de comunicación explicaron que debido a un inconveniente no iban a poder contestarlo para la fecha prevista

Denuncian que los tomaterras tienen información sensible

Sobre la ocupación de tierras que tienen algún problema legal o que en primera instancia el INRA las declara fiscales, desde la CAO hicieron notar que llama la atención que distintas asociaciones de campesinos tienen acceso a los datos donde se indica con precisión la ubicación de estos recortes.

“Antes de que el mismo dueño esté enterado de esa situación los tomatierros ya saben lo que sucede, llegan y se meten en los predios indicando que son tierras fiscales”, denunció Roda.

Para Mario Fernández, productor de maíz, el problema de los tomatierros es que sus dirigentes cuentan con información clave que les permite realizar estos actos ilegales.

“Hace dos años ingresaron en mis tierras. Destrozaron los sembradíos. Cuando llegué, simplemente ellos me indicaron que parte de mis terrenos era tierras fiscales y que el INRA les había otorgado”, recordó Fernández.

Para Gutiérrez, el cuidado de ese tipo de información es fundamental, pues mientras no haya una resolución final ninguna persona o grupo tiene el derecho de ingresar en un predio indicando que lo hace porque es fiscal.

En una entrevista realizada a principio de mes, Jhonny Cordero, director nacional del INRA, explicaba que la institución no dota las tierras fiscales, sino que es el Gobierno el encargado de realizar aquello.

En cuanto a las denuncias por líos de tierra, Cordero señalaba que en Santa Cruz hay 14 denuncias formales, en las provincias Velasco, Chiquitos, Guarayos y Ñuflo de Chávez que recibió el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y que luego de un análisis, en tres de los predios con líos de tierras se usará la fuerza pública para el desalojo de las personas ajenas a esos centros productivos.

Sobre la dotación de tierras fiscales, Róger Montenegro, presidente del Comité Pro Santa Cruz, sostuvo que se está elaborando un censo en la Chiquitania para determinar la cantidad de personas que no tienen tierras.

“Se debe respetar la norma. Si hay tierras fiscales estas se las debe entregar primero a las personas que son del lugar. Que llevan años viviendo en la zona”, dijo Montenegro.

En Unagro y en Guabirá acabó la zafra cañera

El Ingenio Azucarero ‘Roberto Barbery Paz’ (Minero), Ingenio ‘Don Guillermo’ (Colpa-Bélgica) y el Ingenio Azucarero Guabirá (Montero), concluyeron una de las zafras más cortas de las últimas dos décadas a causa de la sequía, que afectó el rendimiento de la caña, donde las proyecciones fijadas, a inicio de la molienda, en la producción de azúcar y alcohol, no se cumplieron.

El ingenio Unagro concluyó su molienda el 10 de septiembre con una producción de 2.560.000 quintales de azúcar de 3,6 millones proyectados.

En gerente de Unagro, Marcelo Fraija, señaló que las causas para que no se hayan logrado las metas de producción, se debió a la sequía que afectó entre un 35 y un 40% menos de productividad de la caña.

Detalló que destilaron un estimado de 12 millones de litros de alcohol.

Sostuvo que durante los 100 días de molienda el problema se originó por la falta de la provisión de caña, similar a lo sucedido en la zafra 1984-1985.

Por su parte, el Ingenio Azucarero Guabirá después de 120 días de molienda terminó la zafra con una producción, hasta el jueves, de 1.670.000 toneladas de caña, una producción de 2.511.636 quintales de azúcar de 3,6 millones proyectados y un estimado de 48 millones de 69 millones de litros de alcohol.

Tanto Fraija como Aguilera garantizaron por separado el abastecimiento de 8,5 millones de quintales para el consumo interno.